

La gota que rebalsó el vaso: Un acercamiento a las problemáticas que condujeron a los estallidos sociales en Chile (2019) y Colombia (2021).

Ronchi, Camila Mariana

Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

camironchii@gmail.com

Introducción

A partir de 2019 se extendió a lo largo de América Latina una nueva ola de protestas masivas. Estas se caracterizaron por su composición heterogénea, la toma del espacio público, la impugnación de los proyectos de las derechas del siglo XXI, la revitalización de la narrativa antineoliberal y la visibilización de la intensificación de las políticas conservadoras de los gobiernos de turno. (Soler et al., 2022)

Chile y Colombia tienen historias particulares que se han distanciado en varios aspectos del resto de las experiencias latinoamericanas. Ambos países tienen una larga historia neoliberal, sostenida hasta el momento de los estallidos, un importante autoritarismo y presencia de las fuerzas armadas, así como también se vivía al momento de las protestas una importante crisis de representación, como consecuencia de la desconexión de la clase política con las necesidades y demandas de la sociedad.

A esto se suma la vigencia de modelos económicos que profundizan las desigualdades entre los distintos estratos de la sociedad, y también, como parte de las medidas neoliberales aún vigentes, ambas experiencias presentan la mercantilización de los servicios sociales esenciales, como la salud, la educación y las pensiones, así como también condiciones precarias y desreguladas de empleo.

En Chile y Colombia estos levantamientos surgen ante medidas aparentemente pequeñas: el aumento del metro en Santiago de Chile y la propuesta de una reforma tributaria en Colombia. Estas a simple vista, eran pequeñas modificaciones, pero resultaron ser la gota que rebalsó el vaso para dos sociedades que hace años eran ignoradas por el poder político.

En ambos casos llegaron al poder en las elecciones posteriores a las protestas las primeras experiencias de izquierda con la asunción de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro

en Colombia en el año 2022, lo cual pone en manifiesto el agotamiento de la legitimidad de los partidos de derecha tradicionales.

En ese sentido, el objeto del trabajo es analizar las problemáticas y los contextos en los que emergieron los estallidos sociales en cada país, poniendo especial atención a los modelos neoliberales, manifestaciones anteriores y demandas insatisfechas, la crisis de representatividad y la forma de actuar del Estado y las fuerzas de seguridad ante acciones contenciosas.

Hegemonía neoliberal

A partir de los años setenta, el neoliberalismo se extendió a lo largo de América Latina consolidándose como el modelo dominante. Este no fue únicamente económico, con la aplicación del consenso de Washington¹ en la gran mayoría de los países de la región, sino que se constituyó como una nueva hegemonía, ya que “[...] constituyó una propuesta global de interpretación del lazo social, de la vida económica y una teoría sobre el individuo.” (Bohoslavsky, 2023:191)

El neoliberalismo chileno fue un emblema en América Latina, siendo este país el laboratorio de este modelo como experiencia de gobierno. Con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ingresa al poder el paradigma neoliberal y el autoritarismo, rasgos que perduran en el Estado y la Constitución del país hasta la actualidad.

Castiglioni (2019) propone que el modelo chileno se encuentra consagrado en dos grandes documentos: El Ladrillo y la Constitución Política de Chile de 1980. El Ladrillo fue el programa de desarrollo económico, creado por los *Chicago Boys*², que ofreció un diagnóstico de los principales problemas del país y propuso una serie de medidas que los solucionaran, siendo estas: la abstención del Estado de intervenir en la economía y de proveer bienes y servicios, solo pudiendo encargarse cuando el mercado no los ofreciera, así como también se impulsó la privatización y reducción de políticas y beneficios sociales, los cuales se concentraron únicamente en los sectores más vulnerables. Por su parte la Constitución

¹ Consistió en un conjunto de pautas para el buen gobierno de la economía, que defendía la liberación del comercio y del mercado, la desregulación económica, la limitación de la intervención del Estado, privatizaciones y ajustes estructurales.

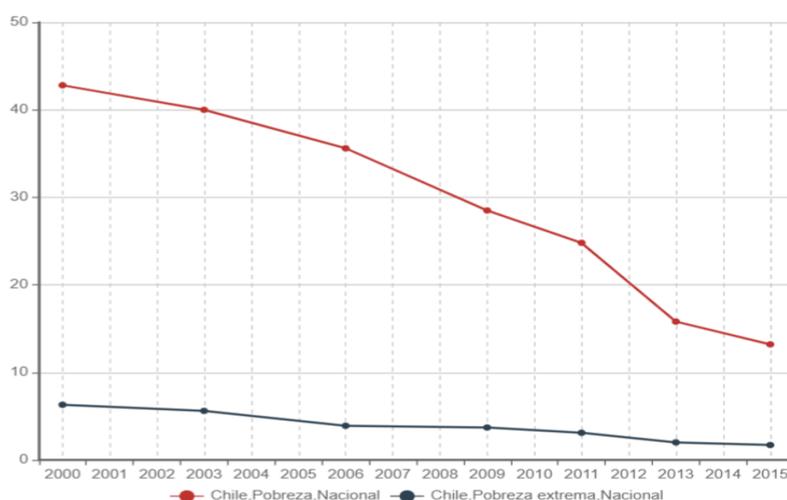
² En 1956 la Universidad Católica de Chile firmó un convenio de cooperación con la Universidad de Chicago para que sus estudiantes más destacados pudieran realizar sus posgrados allí. A estos estudiantes se los denominó *Chicago Boys*.

Política de Chile de 1980³, ideada principalmente por Jaime Guzmán⁴, la cual buscó “despolitizar y desmovilizar a la sociedad, limitar la polarización ideológica y promover la estabilidad preservando el *statu quo*.” (Castiglioni, 2019) Al incluirse los principales componentes del modelo chileno en la Carta Magna, se limita la capacidad de acción de futuros gobiernos y, las diversas limitaciones como el quorum calificado y las supermayorías, implican una alta dificultad para la implementación de cualquier transformación significativa.

Este modelo mantuvo su estabilidad, ya que hasta 2015 logró un crecimiento de la economía constante, y una baja pobreza e indigencia⁵ (Gráfico 1).

Gráfico 1

Población en situación de pobreza y pobreza extrema, 2000-2015



Fuente: CEPAL, Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

A diferencia de Chile, en el caso colombiano el neoliberalismo fue implementado a partir de 1985 como consecuencia de la crisis cafetera (materia prima de la que dependía la economía del país) y de la presión que implicaba para esta época la importante deuda externa. En este periodo además de encontrarse en una profunda crisis económica, Colombia estaba atravesado por una importante crisis institucional, alta conflictividad social, la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas, y la presencia y presión de Estados Unidos. (Gunturiz, 2023)

El Estado de Excepción fue una constante desde 1978 hasta 1990 y también lo fue el poder y presencia de militares y grupos paramilitares. Esto sumado con la importantísima

³ Promulgada por la dictadura de Pinochet.

⁴ Uno de los asesores más cercanos a Pinochet y fundador del partido Unión Democrática Independiente, el cual es parte de la coalición de gobierno de Piñera.

⁵ Pobreza extrema.

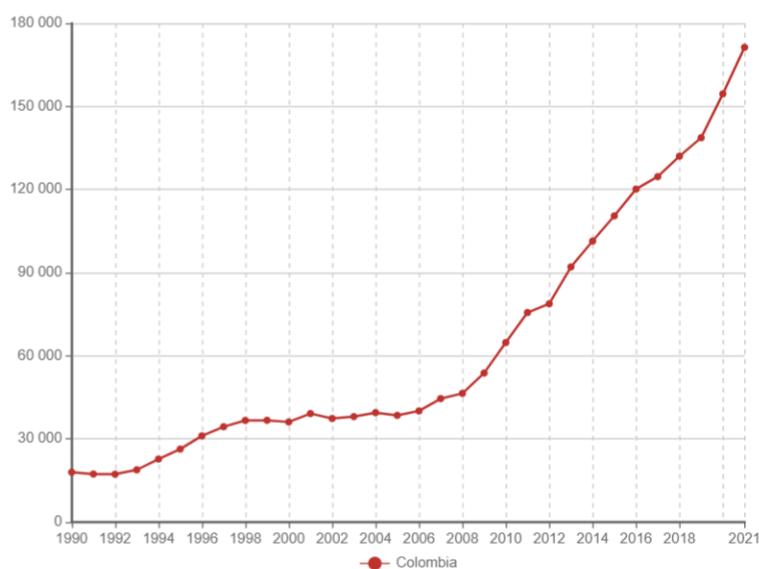
violencia desplegada tanto desde el Estado como por parte de los llamados subversivos, socavaron las bases de la resistencia social.

Gunturiz (2023) propone que el neoliberalismo se implementó en cinco etapas: las reformas legales estructurales para la desregulación de la economía (1990-1991), la formulación de una constitución económica (1991), reformas constitucionales de profundización de la desregulación económica (1992-1998), el ordenamiento para la gestión de la crisis y refuerzo de la desregulación económica y la disciplina fiscal (1999-2004), y, finalmente, la supra nacionalización del orden jurídico-económico mediante la “negociación” de tratados de libre comercio.

De 1993 en adelante, se profundizó exponencialmente la deuda externa (Gráfico 2) y la presencia de los Estados Unidos sobre el país, lo cual significó cada vez más ajustes y reformas neoliberales. Para 1999 Colombia y Estados Unidos firman el “Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, más comúnmente conocido como “Plan Colombia”, el cual tiene como objetivo combatir el narcotráfico y brindar apoyo al desarrollo económico y al fortalecimiento institucional. A partir de este año y hasta 2016 el país recibió más de 14 millones de dólares por parte de la potencia, de los cuales más del 70% se destinó al sector militar. Durante este tiempo se triplicaron la cantidad de soldados profesionales y se instalaron importantes empresas militares estadounidenses. (Arias Barona et al, 2020)

Gráfico 2

Deuda externa total en millones de dólares, 1990-2021



Fuente: CEPAL, basada en fuentes nacionales

Protestas anteriores y reclamos históricos

Como analizaré en un próximo apartado, en ambas experiencias las fuerzas de seguridad tienen una importante presencia y poder. Esto, sumado al autoritarismo y la desigualdad, produce pueblos poco articulados y politizados. Es por esto que los estallidos de 2019 y 2021 fueron tan significativos en ambos países: fueron la culminación de procesos que se venían gestando hace años, pero que no encontraban vías masivas y efectivas para visibilizarse.

En Chile, desde la implementación del modelo neoliberal, se vivieron varios ciclos de protesta, que fueron sucedidos por periodos de desactivación social e indiferencia política. Fue en 2011 cuando se vivió la experiencia contenciosa más importante en veinte años, en la que se debe destacar el rol de la juventud, actor que sigue teniendo protagonismo en las manifestaciones del estallido. Desde ese año se dio un masivo aumento de las acciones de protesta, especialmente en la cantidad de participantes (Oliveira, 2023).

La baja de la pobreza e indigencia (Gráfico 1), significó la conformación de una clase media precarizada, la cual, si bien se encuentra por arriba de la línea de pobreza, tiene muy poco acceso a beneficios sociales y a servicios de calidad en materia de salud, pensiones, empleo y educación.

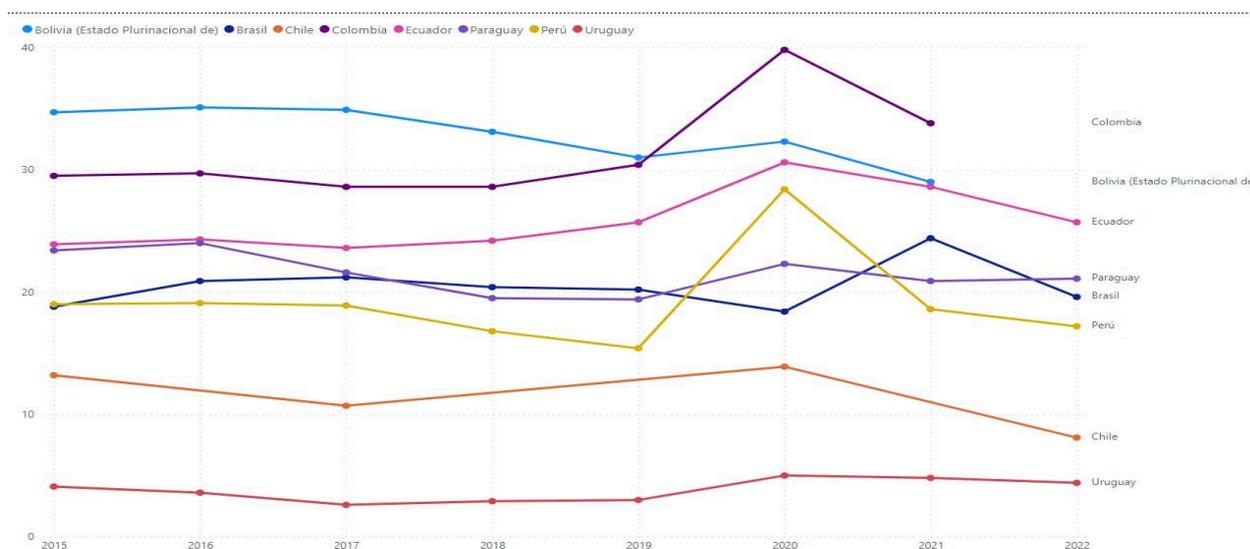
Las expectativas que vinieron con el modelo chileno, caracterizado como milagroso por diversos líderes tanto nacionales como del exterior, no se coincidieron con las condiciones de vida reales de la mayoría de la población chilena (Castiglioni, 2019). Un claro ejemplo de esto es el del sistema educativo. Según el Consejo Nacional de Educación la matrícula universitaria correspondiente a estudiantes de primera generación para 2007 fue del 70%. Lo que este número no nos dice es que esos estudiantes enfrentaron importantísimas dificultades dentro del sistema: desde endeudamiento para lograr acceder, hasta deserción⁶ por necesidad de trabajar, o por no poder sostener la deuda, a lo que debemos sumar el hecho de que el acceso a universidades de mayor nivel y posteriormente a los mejores puestos de trabajo, se encuentra principalmente cooptado por los sectores más privilegiados, relegando al resto de la población a formas de empleo precarias, sin protección y con tipos muy distintos de contrato laboral. A su vez la privatización de la salud implicó el encarecimiento de medicamentos y tratamientos, un servicio lento y de diferente calidad para los distintos estratos de la sociedad.

⁶ Para el 2018 un 36.6% de los alumnos vulnerables desertan en el tercer año de la carrera (Banco Mundial, 2018).

Si bien el modelo chileno redujo la pobreza y logró (al menos hasta 2015) un crecimiento económico constante, esto no vino acompañado de la reducción de las desigualdades entre los diversos sectores. Lo cual se ve muy claramente cuando consideramos que al momento del estallido (2019) es uno de los países con menos población pobre de la región (Gráfico 3), pero, es el tercero más desigual de acuerdo al Índice de Gini. (Gráfico 4)

Gráfico 3

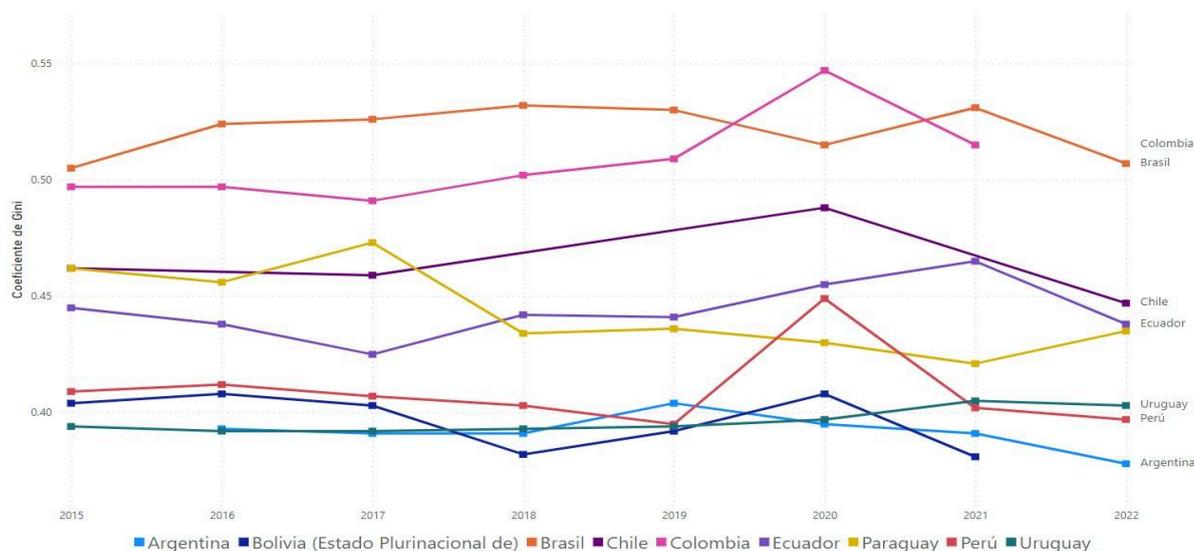
Índice de pobreza en el Cono-Sur, 2015-2020



Fuente: Elaboración propia (2024) con base en datos de CEPAL

Gráfico 4

Coefficiente de Gini en el Cono-Sur, 2015-2022



Fuente: Elaboración propia (2024) con base en datos de CEPAL

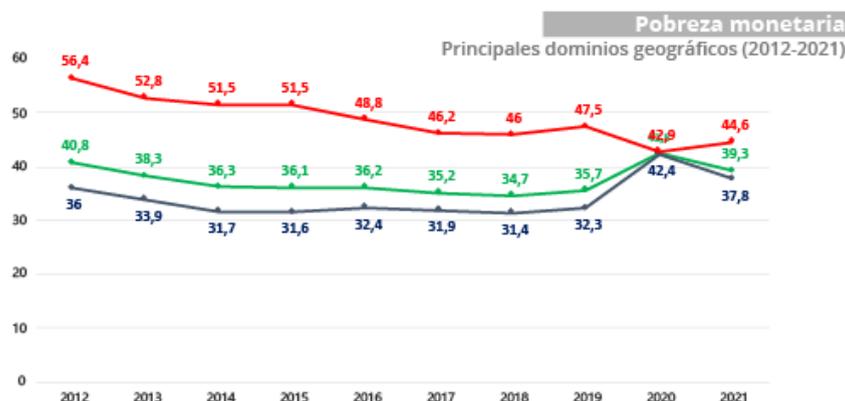
En el caso de Colombia, se vió desde 2007 un significativo aumento de las acciones de protesta, registrando la BDLS-CINEP un aumento del 35% con respecto a años anteriores, creciendo otro 20% para 2018. En ese año, como reacción ante la victoria electoral de Iván Duque (2018-2022), sucesor de Uribe y Santos, se llevaron adelante una serie de importantes y masivas protestas, reclamando mejores condiciones educativas, del sistema de salud y laborales, contra del modelo actual de acumulación, que profundiza las desigualdades entre los diversos estratos, y contra la política, la cual desde hace décadas no incluía en la agenda las necesidades de los sectores menos privilegiados, y que implementó en los diversos mandatos un desmedido uso de las fuerzas de seguridad para garantizar el orden social.

A esto se le debe agregar las movilizaciones que se desataron en diversos momentos en reclamo a la forma en la que el gobierno afrontó la lucha contra la guerrilla, ya que la política del Estado de ejercer la violencia, en muchos casos cometiendo abusos y atropellos a los derechos humanos, era respondido del otro lado con más violencia, llevando a que mueran una elevada cantidad de líderes sociales y políticos a lo largo de los años.

Al momento del estallido, Colombia presentaba los peores indicadores sociales de la historia del país, los cuales se agravaron con la Pandemia del Covid-19 como consecuencia del mal manejo de esta por parte del gobierno. Era para 2021 el segundo país más desigual de la región (Gráfico 4), sumado a una alta población pobre, que llegó al 42% en ese mismo año (Gráfico 5).

Gráfico 5

Pobreza monetaria Colombia, 2012-2021



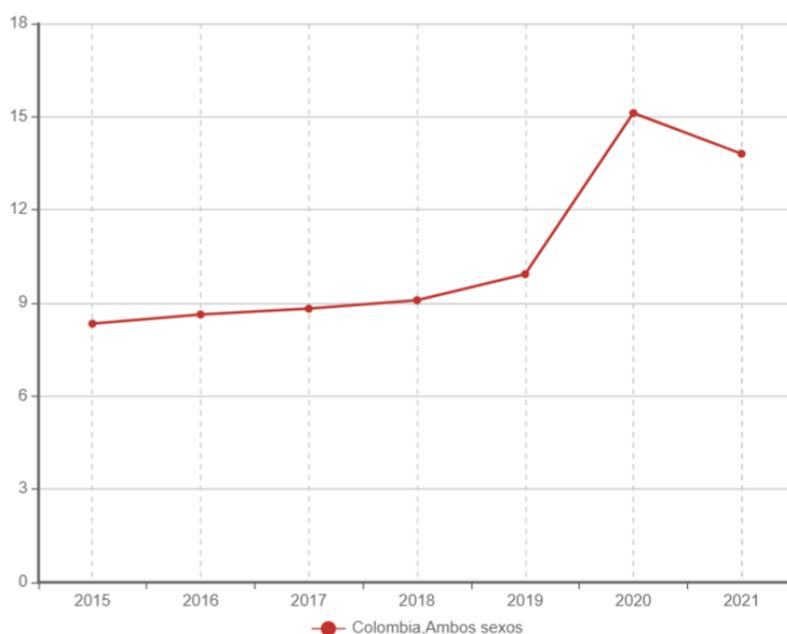
*nacional *cabeceras *CP-RD

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

De acuerdo al informe de INVAMER, la población colombiana considera para el 2021 que los principales problemas a los que se enfrenta el país son: la corrupción, el desempleo⁷ (Gráfico 6), la economía y el orden público/seguridad. En cuanto a la corrupción para inicios de este año un 91% considera que está empeorando, un 86% sostiene que ha empeorado el costo de vida desde el inicio del gobierno de Duque y un 87% dice vivir más inseguridad. A su vez, algo importante a destacar es que un 66% considera que hay un mal manejo de la situación con el narcotráfico y las guerrillas, tema que Duque puso como central en su campaña electoral. Es decir que ni siquiera logró tener una imagen positiva por parte de la sociedad en el ámbito que más atención y presupuesto le dedicó.

Gráfico 6

Tasa de desocupación de Colombia, 2015-2021



Fuente: CEPAL, sobre base de cifras oficiales del país.

⁷ De acuerdo a los datos de CEPAL (basado en cifras oficiales de los países), Colombia era para 2021 el país con mayor desocupación de la región, con un 13.8%.

Crisis de representatividad

Con la hegemonía neoliberal, vino la aceptación de la democracia como única forma de gobierno. Bohoslavsky (2023) propone que esto se dió porque:

Se trata de democracias neoliberalizadas, esto es, de regímenes políticos en los cuales las pujas, las luchas y la negociación política no ofrecen riesgos para las élites. Son democracias en las cuales la única iniciativa política admisible es aquella que refuerza una orientación económica neoliberal y controla los niveles de participación y toda la dimensión sustancial de la política. (p.204)

Se buscó la despoltización de la sociedad civil, relegandola a expresarse únicamente mediante el voto, se gobernó cada vez más por decreto, y se excluyó de la agenda las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tanto en el caso chileno como en el colombiano, los gobiernos democráticos del siglo XXI representaron una continuidad de los modelos neoliberales, con la permanencia en el poder de los mismos actores durante años.

En el caso de Chile entre el 2006 y 2022 (es decir, durante 16 años y cuatro mandatos presidenciales) gobernaron alternándose el mando Michelle Bachelet⁸ y Sebastián Piñera⁹. Más allá de las diferencias entre ambos mandatarios, ninguno de los dos llevó adelante reformas significativas al modelo ni a la Constitución del país, manteniendo por fuera de sus agendas las demandas de gran parte de la población.

La falta de alternativas entre los partidos políticos tradicionales y su incapacidad y desinterés en la resolución de las problemáticas que afectan a la mayoría del pueblo chileno, llevaron a un creciente descontento con las instituciones y los partidos. Para 2018 tan solo un 1% de los chilenos decía confiar en los partidos políticos¹⁰ y al momento del estallido (2019) la imagen del entonces presidente Piñera se encontraba completamente desplomada con tan solo un 13% de aprobación de la población chilena¹¹.

El caso colombiano no se diferencia demasiado, con la particularidad de que en este país se dio la semicontinuidad¹² de un mismo sector en el poder durante 20 años, con los

⁸ Presidenta de Chile entre los años 2006-2010 y 2014-2018.

⁹ Presidente del país entre 2010-2014 y 2018-2022.

¹⁰ De acuerdo al informe “EFICACIA POLÍTICA Y OPCIÓN POR LOS INDEPENDIENTES: Razones y expectativas” del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (2021).

¹¹ De acuerdo al informe de la consultora CADEM, 2019.

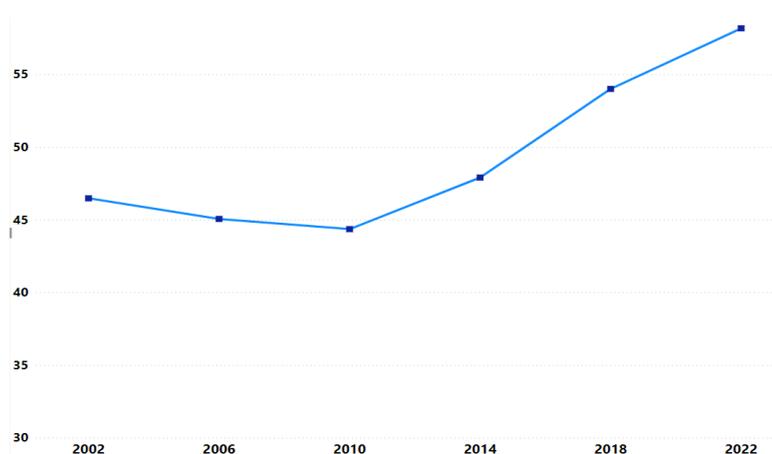
¹² Santos luego de su elección se corrió de las directrices de su mentor, implicando este periodo una semi ruptura.

mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022), siendo Uribe la principal fuente de legitimidad de sus sucesores. Durante este periodo el foco de la política estuvo puesto en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, así como también en la inversión extranjera y el beneficio de los más ricos. Esto, sumado a las crecientes denuncias contra Uribe por corrupción y violaciones de derechos humanos, implicó una creciente falta de credibilidad en las instituciones y los medios de comunicación, así como también una baja participación electoral y una imagen tanto de Uribe como de Duque cada vez más negativa. Al momento del estallido la imagen positiva de Duque era tan solo de un 23%¹³.

En este tiempo, con excepción en los breves ciclos contenciosos de años anteriores, la participación en la democracia por parte de la ciudadanía quedó recluida a la votación. Ambos países tienen, a partir de 2010, los porcentajes de participación electoral bajos en comparación al resto de los países latinoamericanos, sin superar el 50% de la población con la posibilidad de votar en la mayoría de las elecciones presidenciales entre 2010 y 2018, elevándose la participación en las elecciones posteriores a los estallidos (Gráficos 7 y 8¹⁴). En el caso de Colombia la participación ha sido históricamente baja, mientras que en Chile, los porcentajes eran altos, pero cayeron significativamente en el año 2013.

Gráfico 7

Porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales. Colombia, 2002-2022



Fuente: elaboración propia (2024) en base a cifras nacionales

¹³ De acuerdo a la encuesta INVAMER, publicada en 2021.

¹⁴ En las elecciones donde hubo segunda vuelta se tomaron los datos de esa votación.

Gráfico 8
 Porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales. Chile, 2006-2021



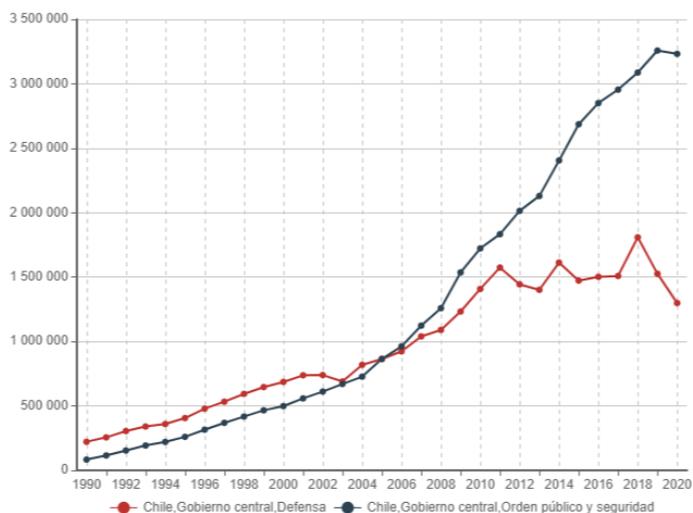
Fuente: elaboración propia (2024) en base a cifras nacionales

El Estado ante la acción colectiva

Tanto en Chile como en Colombia, las fuerzas armadas han tenido un importante protagonismo en el mantenimiento del orden social. En ambas experiencias el Estado ha destinado a lo largo de los años un importante presupuesto a esta área (Gráficos 9 y 10)

Gráfico 9

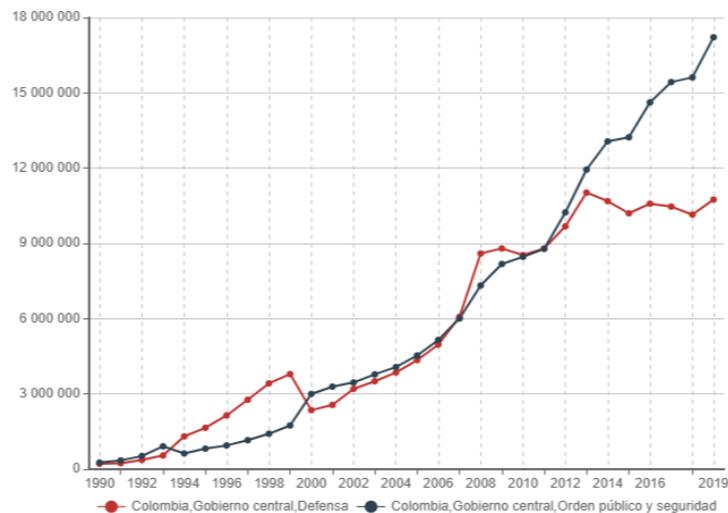
Gasto público en Defensa y Orden público y seguridad en Chile, 1990-2019



Fuente: CEPAL, sobre base de cifras oficiales

Gráfico 10

Gasto público en Defensa y Orden público y seguridad en Colombia, 1990-2019



Fuente: CEPAL, sobre base de cifras oficiales

También, en los dos casos la protesta ha sido caracterizada, tanto por los medios de comunicación como desde el gobierno y sus instituciones, como “terrorista”, “guerra interna”, “golpista”, etc., lo cual ha llevado en manifestaciones anteriores, así como también en los estallidos, a la radicalización de las protestas y a la violencia de manifestantes que reaccionan al sentirse violentados por el gobierno y las fuerzas policiales que no dudan en reprimir y abusar de su poder.

El caso colombiano se ve particularmente atravesado por la larga lucha entre el estado y las guerrillas y el narcotráfico. Esto implica por un lado la presencia regular de fuerzas de seguridad en las calles, así como también la visión, tanto por parte del Estado como desde los medios y los sectores afines al gobierno, de toda protesta como guerrillera, y organizada por el narcotráfico, estigmatizaciones que facilitan la legitimación de vías represivas y de abusos de poder por parte de las fuerzas armadas.

Gunturiz (2023), sostiene que el Estado colombiano ha tenido históricamente tres líneas de respuesta ante la acción colectiva.

En un primer momento se intenta dejar que avance la protesta, con el fin de que los actos más violentos llevados adelante por los manifestantes sirvan como justificación para la segunda forma de respuesta del gobierno. Este primer momento viene acompañado de una represión “blanda”, es decir criminalización, estigmatización y deslegitimación de la protesta. Esto se puede ver por ejemplo en la modificación del decreto 003 de 2021, el cual impuso que se dejaría de considerar como manifestación pacífica a aquella que obstaculice vías o infraestructuras (El tiempo, 19/6/2021), lo cual legitima a las fuerzas de seguridad a reprimir toda manifestación que no siga dicho protocolo.

Luego de este momento, viene un periodo de vías duras de represión, expresado en abusos y violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios¹⁵. En el caso de las protestas de 2021 esto fue denunciado por organismos de derechos humanos que señalaban que entre el 28 de abril y el 3 de mayo había “18 personas asesinadas, 305 heridas, 23 con mutilación o lesiones oculares, 11 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 988 detenidos, 8 allanamientos fueron declarados ilegales, 398 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial, y 47 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes.” (El tiempo, 05/05/2021)

¹⁵ Es una unidad de intervención de control de disturbios y multitudes de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia, creada en 1999, cuya misión es el control de disturbios, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes.

Y, finalmente, si la represión no logra dispersar las protestas, se abren vías de diálogo con los principales actores de la protesta, buscando lograr salir del conflicto de manera negociada.

Por su parte, en Chile “existe baja capacidad institucional de procesar el conflicto, baja tolerancia y represión frente a las protestas.” (Oliveira, 2023). De acuerdo con el informe de el COES¹⁶(2020) desde el 2011 Chile posee una alta conflictividad que se procesa desde fuera de lo institucional, y a partir de octubre de 2019 se da una intensificación y radicalización, con una duplicación de las tácticas disruptivas y violentas.

La respuesta del gobierno chileno ha sido en manifestaciones anteriores, y siguió siendo para 2019, en un primer lugar la deslegitimación de la protesta, catalogandola de guerra (Castiglioni, 2019). De hecho uno de los sucesos que llevó a la masificación del estallido fue la reacción a un audio de la primera dama¹⁷, donde catalogaba los disturbios como una invasión extranjera, así como también las declaraciones del entonces presidente Piñera, que definió a las protestas como “delincuencia pura y dura”, “hordas” y “delincuentes”.¹⁸

Esta estigmatización suele venir acompañada por el despliegue de las fuerzas públicas, así como también la instauración del estado de emergencia y los toques de queda. Solo en las manifestaciones del 30 de noviembre de 2019 se denunciaron más de tres mil personas que requirieron asistencia médica, dos mil heridas por armas de fuego, armas de gases lacrimógenos y otros artefactos utilizados por las fuerzas policiales. Y del total de heridos, 347 personas sufrieron trastornos oculares graves (Aguillera, 2020).

Cuando la violencia no logra la desmovilización de los manifestantes, se pasa a una instancia de diálogo, con el anuncio de ciertas medidas que respondan a las demandas y con el paso a una comunicación conciliatoria y de disculpas por parte del presidente.

Esta segunda instancia ha logrado en protestas anteriores el fin de los ciclos contenciosos, pero, para 2019 la ciudadanía no sólo reclamaban por mejoras en sus condiciones de vida, sino por el hartazgo ante un sistema político que no los representa, lo que llevó a que continúen las manifestaciones a pesar de las medidas propuestas por el gobierno. El gobierno entonces decidió finalizar los toques de queda y el Estado de emergencia, desescalar la violencia policial y, por un lado anunciar cambios en el gabinete (Castiglioni,

¹⁶ Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

¹⁷ <https://nuso.org/articulo/el-ocaso-del-modelo-chileno/>

¹⁸ <https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-ciudad-la-furia/869519/>

2019) y, por el otro se introdujo desde (y hacia) el gobierno la posibilidad de debatir una nueva Constitución (Oliveira, 2023)

Algunas reflexiones finales

Como hemos visto a lo largo del trabajo, los estallidos sociales de Chile y Colombia fueron la culminación de múltiples procesos que se encuentran presentes en ambas experiencias desde la instauración de los modelos neoliberales.

Entre estos procesos hemos puesto el foco en la crisis de representatividad y los reclamos de la ciudadanía por la desigualdad de condiciones de vida entre los sectores más privilegiados y el resto de la población. Fue la impugnación por parte de la ciudadanía a gobiernos que no los representan ni los incluyen en sus agendas, a modelos económicos reproductores de desigualdades, a las precarias condiciones de vida, con sistemas de educación, salud y empleo que expulsan a los sectores populares.

También se debe tener en cuenta para entender la masificación y radicalización de la acción colectiva, el rol de los gobiernos y las fuerzas armadas. Ambos presidentes desestimaron y estigmatizaron las protestas, así como también las reprimieron violentamente. No solo esto, sino que durante años gobernaron únicamente para los más ricos, manteniendo vigente el modelo político, económico y social desde los ochenta. Al momento de los estallidos el sistema político se encontraba completamente derrumbado, con bajísimos niveles de confianza por parte de la sociedad e imágenes muy negativas de los presidentes de turno.

La política se encontraba completamente alejada de la sociedad y demasiado cerca de las fuerzas de seguridad, las cuales fueron esenciales en el mantenimiento del orden social, con el respaldo tanto del poder político como de los medios de comunicación. Este actor fue responsable de miles de muertes y violaciones de derechos humanos, delitos que en su mayoría continúan impunes hasta el presente.

Todas estas situaciones llevaron a que en 2022 ingresen al poder las primeras experiencias de izquierda en ambos países, con la elección de Gabriel Boric en Chile y de Gustavo Petro en Colombia.

Es con todo esto que podemos decir que el aumento del metro en Chile y el intento de reforma tributaria en Colombia fueron la gota que rebalsó el vaso, que estaba desbordado hace años.

En futuras investigaciones indagaremos en los actores que llevaron adelante las manifestaciones de 2019 y 2021, su duración, masividad y principales discursos.

Bibliografía

- Aguilera, Carolina (2020). Violaciones a los derechos humanos en el largo octubre chileno. *Ide As. Idées d'Amériques*, (15). <https://coes.cl/publicaciones/violaciones-a-los-derechos-humanosen-largo-octubre-chileno/>
- Arias Barona et al (2020). Presencia material, patrimonio y activos de EE.UU. en Colombia. CELAG <https://www.celag.org/presencia-material-patrimonio-y-activos-de-eeuu-en-colombia>
- Banco mundial (2023). *Universidades estatales de Chile sortean los desafíos educativos de la pandemia*. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2023/05/03/universidades-estatales-de-chile-sortean-con-xito-los-desaf-os-de-la-pandemia>
- Bohoslavsky, E. (2023). *Democracias, derechas y neoliberalismo (1989-2015)*. Historias mínimas de las derechas latinoamericanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.
- Castiglioni, R.(2019). ¿El ocaso del modelo chileno?. *Nueva Sociedad, Volumen 284*. <https://nuso.org/articulo/el-ocaso-del-modelo-chileno/>
- CEPALSTAT (2021). Base de datos y publicaciones estadísticas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=e>
- CINEP (2014). Informe especial: luchas sociales en Colombia 2013. https://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_luchas
- CINEP (2021). Base de datos de luchas sociales en Colombia. <https://www.cinep.org.co/base-de-datos-movimientos-sociales-2016-2019/>
- COES (2020). Informe Anual Observatorio de Conflictos 2020. <https://coes.cl/wp-content/uploads/Informe-Anual-Observatorio-de-Conflictos-2020-COES.pdf>
- Consultora CADEM (2022). *Encuesta Plaza Pública: Especial gobierno presidente Piñera*. <https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/03/Especial-Cierre-Pin%CC%83era-VF.pdf>
- Gobierno toma nuevas medidas para garantizar la protesta social. (18 de junio, 2021). *El tiempo*.

<https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-gobierno-toma-nuevas-medidas-par-a-garantizar-la-protesta-social-596977>

- Gonzalez, R. Salvatierra V. (2021). *EFICACIA POLÍTICA Y OPCIÓN POR LOS INDEPENDIENTES: Razones y expectativas*. Laboratorio de Encuestas y Análisis Social. https://leas.uai.cl/web/wp-content/uploads/2021/09/Policy_Brief_LEAS_2.pdf
- Gunturiz,...[et al.] (2023). *Protestas en los tiempos de las cóleras, impugnaciones al neoliberalismo en América del Sur*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Matamala, D.(19 de octubre, 2019). Columna de Daniel Matamala: La ciudad de la furia. La tercera. <https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-ciudad-la-furia/869519/>
- Moreno Muñoz, M (05 de mayo, 2021). Organizaciones exigen frenar la militarización de la protesta social. *El tiempo*. <https://eltiempo.com/politica/organizaciones-exigen-frenar-la-militarizacion-de-la-protesta-social-586184>
- Saint-Upéry, M. (2020). Colombia: despertar ciudadano y dilemas políticos después del 21-N. Entrevista a Alvaro Jiménez Millán. *Nueva Sociedad, Volúmen 286*. <https://nuso.org/articulo/colombia-despertar-ciudadano-y-dilemas-politicos-despues-del-21-n/>
- Soler et al. (2022). *Movimientos sociales y derechas en Paraguay (2015-2016), Colombia (2018-2020) y Brasil (2018-2020)*. Estado, democracia y movimientos sociales en América Latina y el Caribe: persistencias y emergencias en el siglo XXI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- INVAMER poll (2021). Agosto de 2021 (medición n° 144) <https://img.lalr.co/cms/2021/09/02225313/Resultados-Invamer-Poll-144-3.pdf>